



Asamblea General

Distr. general
23 de noviembre de 2012
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 64º período de sesiones (27 a 31 de agosto de 2012)

Nº 32/2012 (Iraq)

Comunicación dirigida al Gobierno el 25 de junio de 2012

Relativa a: Mehdi Abedi, Akram Abedini, Bahman Abedy, Aliasghar Babakan, Mohammad Reza Bagherzadeh, Sahar Bayat, Fatemeh Effati, Farhad Eshraghi, Maryam Eslami y Manijeh Farmany (residentes en el Campamento Ashraf); y Asghar Abzari, Ali Reza Arab Najafi, Homaun Dayhim, Fatemeh Faghihi, Zahra Faiazi, Ahmad Fakhr-Attar, Effat Fattahi Massom, Jafar Ghanbari, Habib Ghorab, Robabeh Haghuo (residentes en el Campamento Libertad)

El Gobierno no respondió a la comunicación dentro del plazo de 60 días.

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido mediante la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que especificó y prorrogó el mandato del Grupo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió la citada comunicación al Gobierno.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18,

19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. Según la fuente, durante más de 25 años, los miembros de la Organización Muyahidines del Pueblo del Irán, también conocida como Muyahidin Jalq, han residido legalmente en el Iraq, conforme a las leyes del país, en el Campamento Ashraf. En 2003, durante la Operación Libertad Iraquí, las Fuerzas de la Coalición se hicieron con el control del Campamento Ashraf y, posteriormente, designaron a todos los miembros de la Organización Muyahidines del Pueblo del Irán "personas protegidas" conforme al Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio de Ginebra). El 1 de enero de 2009, el control del Campamento Ashraf pasó al Gobierno del Iraq dentro del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre los Estados Unidos de América y el Iraq. Desde ese momento, la seguridad y el bienestar de los residentes en el campamento se han deteriorado.

4. Al parecer, una vez que el Gobierno se hizo con el control del Campamento Ashraf empezó a restringir la provisión de alimentos, suministros médicos y de mantenimiento, y denegó la libertad de circulación a los residentes para entrar y salir del Campamento y el acceso a sus abogados. En 2009 y 2011 las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron dos ataques injustificados contra el Campamento Ashraf que provocaron docenas de muertos y heridos entre los residentes. A continuación el Gobierno hizo pública su intención de cerrar el Campamento Ashraf a finales de 2011, y amenazó con devolver a los residentes a la República Islámica del Irán.

5. Todo ello hizo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declarase, el 13 de septiembre de 2011, que todos los residentes en el campamento eran solicitantes de asilo, tras haberse comprometido a colaborar con el Gobierno del Iraq a fin de prorrogar el plazo fijado por el Estado para cerrar el Campamento Ashraf. El 25 de diciembre de 2011, las Naciones Unidas y el Gobierno del Iraq firmaron un memorando de entendimiento que estipulaba el traslado voluntario y seguro de los residentes en el Campamento Ashraf al Campamento Libertad, donde se confirmarían sus identidades y se determinaría su condición de refugiados y, a continuación, podrían reasentarse voluntariamente en terceros países. Como parte de ese proceso, el memorando de entendimiento indica que el Gobierno del Iraq garantizará que en el Campamento Libertad se cumplan las normas humanitarias y de derechos humanos, se cuente con una infraestructura adecuada y con servicios de alojamiento y se permita a los

residentes establecer relaciones comerciales con proveedores externos en lo relativo al suministro de servicios públicos y de artículos básicos.

6. El 18 de febrero de 2012, el primer grupo de residentes fue trasladado del Campamento Ashraf al Campamento Libertad. Los residentes descubrieron inmediatamente que las condiciones en el Campamento Libertad no cumplían las expectativas ni lo estipulado en el memorando de entendimiento y el derecho internacional. Carecían de acceso inmediato a tratamientos médicos, de espacio adecuado para el alojamiento, de agua, saneamiento, electricidad y mecanismos de refrigeración, y de instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad. No podían recibir visitas de familiares, amigos y simpatizantes ni comunicarse de forma periódica y libre con el exterior. Además, pronto descubrieron que no podrían abandonar el Campamento Libertad, lo que presuntamente vulneraba sus derechos como solicitantes de asilo. La fuente declara que, si bien los residentes en el Campamento Ashraf habían estado retenidos ilegalmente desde 2009, al menos se encontraban en un entorno seguro con una infraestructura adecuada, que habían construido durante los más de 25 años que habían pasado allí. En el Campamento Libertad, el primer grupo se encontró con que había sido trasladado a una prisión pequeña en condiciones muy duras.

7. Por otro lado, los residentes descubrieron que no se respetaban las garantías procesales porque su privación de libertad no había sido autorizada por ley; sus abogados no podían entrar en el Campamento Libertad y, por lo tanto, no podían comunicarse con ellos ni consultarlos; no había ningún mecanismo de reclamación ni procedimiento de presentación de denuncias que se ocupara de sus condiciones; y los residentes no podían impugnar su internamiento ante un tribunal.

8. El 27 de mayo de 2012, alrededor de 781 de los casi 2.000 residentes en el Campamento Libertad habían finalizado el proceso de verificación para recuperar su identidad. Hasta el momento, el ACNUR solo ha entrevistado a 361 residentes en el Campamento. Desde su llegada el 18 de febrero de 2012, nadie se ha trasladado a un tercer país.

9. El 13 de septiembre de 2011, tras recibir solicitudes de asilo de todos los residentes de Ashraf, el ACNUR declaró que todos los residentes eran "solicitantes de asilo con arreglo al derecho internacional", lo que les daba derecho "a beneficiarse de la protección básica de su seguridad y bienestar"¹. Además, el ACNUR señaló que "colaboraría con el Gobierno del Iraq y con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) y otros interesados para encontrar un lugar [en que procesar las solicitudes de asilo] que garantizara la seguridad y respetara los derechos de todos los solicitantes". En la misma línea, el ACNUR se comprometió a "poner en marcha un proceso para examinar las solicitudes individualmente de manera justa y eficiente".

10. El 21 de diciembre de 2011, el Iraq convino en prorrogar el plazo del cierre del Campamento Ashraf hasta abril de 2012. El 25 de diciembre de 2011, las Naciones Unidas y el Gobierno del Iraq firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de garantizar una solución humanitaria y pacífica para los residentes en el Campamento Ashraf, que fueron consultados al principio del proceso, pero se firmó un acuerdo sin que hubieran podido revisar o aprobar el texto definitivo. En resumen, el memorando de entendimiento permitía el traslado seguro de los residentes en el Campamento Ashraf al Campamento Libertad, donde se determinaría su condición de refugiados antes de que se reasentaran voluntariamente en la República Islámica del Irán o en otros países.

¹ ACNUR, "Camp New Iraq (formerly Camp Ashraf) residents and the determination of their refugee status claims" (Los residentes en el Campamento Nuevo Iraq (antes conocido como Campamento Ashraf) y la determinación de sus solicitudes de la condición de refugiado), 13 de septiembre de 2011. Disponible en www.unhcr.org/refworld/docid/4e857b3b2.html.

11. Al 1 de junio de 2012, habían sido trasladados del Campamento Ashraf al Campamento Libertad alrededor de 1.949 residentes, de los cuales 611 eran mujeres y 9 menores de 18 años. Sin embargo, las condiciones en el campamento no cumplían las expectativas de los residentes en Ashraf, los requisitos establecidos en el memorando de entendimiento o las disposiciones pertinentes del derecho internacional. La extensión del Campamento Libertad es de 658.000 m², considerablemente menor que la del Campamento Ashraf. Los residentes se alojan en viviendas de seis personas, que miden unos 12 por 3,6 m (43 m²), unos 7,2 m² por persona.

12. Antes del traslado, los residentes en el Campamento Ashraf exigieron el compromiso de que dentro del Campamento Libertad no hubiera policía iraquí, después de los ataques que habían lanzado las fuerzas de seguridad iraquíes contra el Campamento Ashraf en el pasado. No obstante, los residentes informaron de la existencia de varios puestos policiales dentro del campamento y de la presencia constante de 150 guardias policiales armados con ametralladoras. Informaron además de que el tamaño del Campamento Libertad era considerablemente menor de lo previsto. Hombres y mujeres vivían en zonas residenciales separadas. Sin embargo, las fuerzas iraquíes habían invadido 70 m en la zona de las mujeres en el Campamento Libertad y se habían instalado allí. Esto era motivo de tensión y una fuente de acoso a las mujeres en el campamento. Las mujeres residentes en el campamento han protestado por esta situación ante la UNAMI en repetidas ocasiones, por escrito y verbalmente.

13. Asimismo, los residentes han informado sobre las circunstancias que contravienen directamente las condiciones establecidas en el memorando de entendimiento. Informan de deficiencias importantes en las condiciones del campamento, como problemas con el agua potable y la electricidad, la falta de un sistema de alcantarillado adecuado y el hecho de que se les niegue la libertad de circulación y el acceso a servicios médicos. Por lo tanto, los residentes señalan que el Campamento Libertad es una prisión en vez de un lugar de tránsito temporal. El abastecimiento de agua y el suministro de electricidad son motivo de especial preocupación. Ya que el Campamento Libertad no está conectado a una fuente central de agua, los residentes se ven obligados a obtener el agua de camiones cisterna externos y de una red interna estropeada.

14. Sin embargo, las empresas privadas que surten de agua el campamento se enfrentan a numerosos obstáculos introducidos por las fuerzas de seguridad iraquíes y con frecuencia se les impide entrar. Además, a causa de los impedimentos que interpone el Gobierno del Iraq, los residentes en el Campamento Libertad no han podido trasladar las carretillas elevadoras y el material mecánico necesario para llevar a cabo reparaciones y descargar los suministros necesarios para la vida cotidiana. Para adquirir sus alimentos, los residentes deben dirigirse a proveedores externos que tienen problemas para introducir la mercancía en el Campamento Libertad. En algunos casos, al parecer, los iraquíes prohíben el suministro de alimentos; en otros, la policía iraquí amenaza a los conductores o la mercancía se retiene en el exterior durante varios días hasta que ya no es apta para el consumo.

15. También escasea el suministro eléctrico fiable y accesible. Toda la potencia procede de generadores, ya que el Campamento Libertad no está conectado a la red de Bagdad. Los elevados costes y necesidades de combustible agravan el problema de suministro.

16. El acceso a la atención médica, a pesar de estar disponible, no es inmediato. Cerca del Campamento Libertad hay un centro médico, pero quienes padecen graves problemas médicos deben ser trasladados a un hospital en el exterior. Los traslados de los enfermos graves a un hospital se demoran horas y, en algunos casos, días.

17. Por otro lado, los residentes tienen prohibido abandonar el campamento, lo que supone una denegación de la libertad de circulación.

18. En opinión de la fuente, además de esas condiciones difíciles, hay graves infracciones de las garantías procesales. El Gobierno ha prohibido el acceso al campamento a todos los abogados; los abogados iraquíes que representan a los residentes y se acercan a la entrada reciben amenazas y son rechazados.

19. Según la fuente, la privación de libertad de los residentes corresponde a la categoría IV de la clasificación de casos elaborada por el Grupo de Trabajo, porque son solicitantes de asilo sometidos a una retención prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial. En concreto, la detención de los residentes se debe a la privación de sus libertades consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Conjunto de Principios) y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (Reglas mínimas). Además, la privación de libertad vulnera las Directrices revisadas del ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables con respecto a la detención de solicitantes de asilo y la Deliberación N° 5 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de la situación relativa a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo (E/CN.4/2000/4, anexo II).

20. La fuente añade que se trata de una situación clara en que los residentes en el campamento son solicitantes de asilo sometidos a una detención arbitraria en contravención de las garantías procesales, y las condiciones de su reclusión infringen las normas mínimas reconocidas en el derecho internacional.

21. La fuente pide al Grupo de Trabajo que amplíe el alcance de su opinión previa relativa a la detención de diez residentes en el Campamento Libertad (opinión N° 16/2012) para que incluya a todos los residentes en el Campamento Libertad y el Campamento Ashraf en su conjunto, ya que sus situaciones son o bien idénticas o fundamentalmente iguales a las examinadas en dicha opinión en la que el Grupo de Trabajo declaró que la detención de los diez residentes contravenía las obligaciones contraídas por el Iraq en virtud de los artículos 9, párrafo 1, y 10, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribía en la categoría IV aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

22. La fuente añade que, al ser solicitantes de asilo, los residentes deben gozar de protección con arreglo al artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Sin embargo, por los siguientes motivos, deberían considerarse detenciones arbitrarias al vulnerar el artículo 9, párrafo 1:

- En primer lugar, las detenciones no están autorizadas según la legislación interna. El Gobierno no emitió en ningún momento instrumentos jurídicos que las autorizasen. Incluso en ese caso, infringirían el derecho internacional ya que, como se indica más abajo, constituirían otras violaciones de los derechos humanos y, por lo tanto, vulnerarían el artículo 9.
- En segundo lugar, las detenciones no son razonables ni necesarias. No hay peligro de que los residentes huyan, ni han cometido delito alguno. Como ha quedado demostrado durante los más de 25 años que llevan en el Iraq, los residentes están absolutamente dispuestos a vivir en ese país en condiciones similares a las que tenían en el Campamento Ashraf antes de que las Fuerzas de la Coalición invadieran el Iraq mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Además, no hay indicios de que el Gobierno iraquí haya estudiado la posibilidad de buscar un método de reclusión menos invasivo.
- En tercer lugar, las reclusiones no han sido objeto de examen periódico ni de control judicial. Incluso si el Iraq hubiera presentado una base legal para la detención inicial, la autorización sería irrelevante, ya que durante 42 meses no ha habido un control judicial periódico de la reclusión de los residentes.

- Por último, el Campamento Libertad carece de procedimiento de presentación de reclamaciones o de mecanismo de interposición de denuncias, por lo que los residentes no pueden impugnar su privación de libertad. En consecuencia, están sometidos a una detención arbitraria.

23. Los primeros residentes entraron legalmente en el Iraq hace 26 años y, desde entonces, han vivido en el país cumpliendo sus leyes. El 13 de septiembre de 2011, el ACNUR declaró que todos los residentes en el campamento eran solicitantes de asilo. Por esas dos razones, se considera que se hallan "legalmente en el territorio de[l] Estado" del Iraq y, por lo tanto, gozan de la protección adicional otorgada en virtud del artículo 12, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el Gobierno del Iraq ha ejercido un control total sobre los residentes desde el momento en que relevó a los Estados Unidos en el control del Campamento Ashraf el 1 de enero de 2009. El Gobierno nunca ha justificado el motivo por el cual un proceso de ese tipo solo podía tener lugar en el contexto de la reclusión prolongada de los residentes. Como está prohibido que estos abandonen el Campamento Libertad, la fuente sostiene que su derecho a la libertad de circulación en virtud del artículo 12, párrafo 1, está siendo vulnerado.

24. Según la fuente, las condiciones en ambos campamentos infringen las garantías procesales del Conjunto de Principios y las Reglas mínimas. Se registran otras infracciones de lo dispuesto en el Conjunto de Principios, a saber, respeto del principio 17, párrafo 1, y del principio 18, párrafos 1 y 2, ya que los abogados de los residentes tienen prohibido entrar en el Campamento Libertad, por lo que se niega a los residentes la posibilidad de comunicarse con ellos y consultarlos. Los residentes tampoco pueden impugnar su reclusión ante un tribunal, lo que conculca los principios 11 y 32.

25. La privación de libertad de los residentes en el campamento infringe además las garantías estipuladas en la Deliberación N° 5 del Grupo de Trabajo. Cuando este determina si la detención de un solicitante de asilo es arbitraria, se evalúa también si se respetan las garantías procesales reflejadas en la Deliberación N° 5. Los solicitantes de asilo detenidos deben ser llevados ante una autoridad judicial.

26. A juicio de la fuente, los residentes no están autorizados a abandonar el Campamento Ashraf o el Campamento Libertad, lo que constituye privación de libertad. El Gobierno del Iraq no ha examinado otras opciones establecidas.

27. La fuente sostiene que las personas mencionadas están sometidas a una reclusión arbitraria. Se les deniega la libertad de circulación en contravención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las condiciones de reclusión infringen el Pacto, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Respuesta del Gobierno

28. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido en el plazo de 60 días a las denuncias transmitidas por el Grupo, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 de los métodos de trabajo del Grupo.

29. Pese a no haber recibido información alguna del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir su opinión sobre la detención de las 20 personas objeto de este caso, de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo.

Deliberaciones

30. En su opinión previa sobre el Campamento Libertad, el Grupo de Trabajo concluyó que "las condiciones del Campamento Libertad son similares a las de un centro de detención, donde los residentes no gozan de libertad de circulación ni de posibilidades de

relacionarse con el exterior. Tampoco disfrutaban de libertad de circulación ni de nada que se asemeje a una vida en libertad dentro del campamento. La situación de los residentes en el Campamento Libertad es similar a la de detenidos o reclusos" (opinión N° 16/2012, párr. 16). El Grupo de Trabajo consideró además que "no hay motivos legales para retener a las personas mencionadas... en el Campamento Libertad, y que dicha privación de libertad no cumple los estándares y principios del derecho internacional de los derechos humanos. De manera más concreta, contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (*ibid.*, párr. 17).

31. El Grupo de Trabajo reafirma este razonamiento y considera que se aplica también a los residentes en el Campamento Ashraf. El Gobierno optó por no refutar el hecho de que los 20 residentes de los 2 campamentos, en cuyo nombre se presentó la comunicación, no están autorizados a abandonar el campamento y se les niega la posibilidad de recibir visitas de familiares, amigos y simpatizantes, y se restringen los medios para comunicarse periódica y libremente con el exterior. De hecho, los residentes en el Campamento Libertad y del Campamento Ashraf están privados de su libertad efectivamente sin justificación legal.

32. Los residentes de los campamentos que han solicitado se les conceda el estatuto de refugiado han sido reconocidos oficialmente como solicitantes de asilo conforme al derecho internacional².

33. El Grupo de Trabajo recuerda que, en su resolución 1997/50, la Comisión de Derechos Humanos rogó al Grupo de Trabajo que prestase toda la atención necesaria a las informaciones relativas a la situación de los solicitantes de asilo que fuesen objeto de retención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo o judicial.

34. El Grupo de Trabajo reitera que, para determinar si la retención de un solicitante de asilo es arbitraria o no, toma en cuenta si la persona puede o no beneficiarse de las siguientes garantías, entre otras cosas: a) derecho a que la decisión relativa a la retención administrativa sea revisada por una jurisdicción superior o una instancia equivalente que sea competente, independiente e imparcial; b) posibilidad de comunicarse, por un medio eficaz como el teléfono, el fax o el correo electrónico, desde el lugar de retención, en particular con un abogado y la familia; c) disponer de la asistencia de un abogado de su libre elección en forma de visitas en el lugar de retención y, en su caso, en la audiencia; y d) posibilidad de beneficiarse de otras medidas diferentes de la retención administrativa³.

35. En el caso que se examina, las autoridades no cumplen ninguna de las garantías mencionadas, lo que lleva al Grupo de Trabajo a concluir que la retención de las personas en cuestión es arbitraria y, específicamente, contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Decisión

36. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite la siguiente opinión:

La detención de Mehdi Abedi, Akram Abedini, Bahman Abedy, Aliasghar Babakan, Mohammad Reza Bagherzadeh, Sahar Bayat, Fatemeh Effati, Farhad

² Véase, por ejemplo, ACNUR, "UNHCR calls for cooperation and solidarity amid efforts to find solutions for the residents of Camp 'New Iraq'" (El ACNUR pide cooperación y solidaridad en la búsqueda de soluciones para los residentes en el Campamento Nuevo Iraq), comunicado de prensa de 26 de julio de 2012. Disponible en www.unhcr.org/501135259.html.

³ Informe anual del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (E/CN.4/1999/63), párr. 69.

Eshraghi, Maryam Eslami, Manijeh Farmany (residentes en el Campamento Ashraf); y de Asghar Abzari, Ali Reza Arab Najafi, Homaun Dayhim, Fatemeh Faghihi, Zahra Faiazi, Ahmad Fakhr-Attar, Effat Fattahi Massom, Jafar Ghanbari, Habib Ghorab, Robabeh Haghguo (residentes en el Campamento Libertad) es arbitraria, por cuanto contraviene el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, párrafo 1, y 10, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en la categoría IV aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

37. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Iraq que adopte las medidas necesarias para reparar la situación de esas 20 personas y ajustarla a los principios y normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

38. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, la reparación adecuada sería poner inmediatamente en libertad a esas personas, eliminar todas las restricciones a su libertad de circulación y concederles el derecho efectivo a una indemnización, con arreglo al artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

39. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a buscar otras opciones frente a la detención de los solicitantes de asilo en el Campamento Ashraf y el Campamento Libertad.

40. De conformidad con el artículo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo considera procedente remitir las denuncias relativas a las condiciones en el Campamento Ashraf y el Campamento Libertad a los mecanismos pertinentes de derechos humanos para que adopten las medidas apropiadas.

[Aprobada el 30 de agosto de 2012.]
